

DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL

Sumilla. La valoración razonable de los medios de prueba legítimamente incorporados al contradictorio, avalan la decisión asumida por el Tribunal de Mérito. El motivo invocado por el representante del Ministerio Público no tiene soporte probatorio, pues existe insuficiencia de medios de prueba que respalde la tesis inculpativa del titular de la acción penal.

Lima, diez de octubre de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la **FISCAL ADJUNTA SUPERIOR DE LA CUARTA FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LIMA** contra la sentencia del doce de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Cuarta Sala Penal con Reos Libres Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima –página quinientos diez–, que absolvió a ABEL ERNESTO CULIS POMA, de la acusación fiscal como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual en grado de tentativa, en perjuicio de la menor con Clave N.º 787-2008.

Intervino como ponente la jueza suprema **PACHECO HUANCAS**.

CONSIDERANDO

HECHOS IMPUTADOS

1. Se atribuyó a ABEL ERNESTO CULIS POMA, que el once de noviembre de dos mil dieciocho, en horas de la noche, intentó abusar sexualmente de la menor agraviada con Clave N.º 787-2008 de diecisiete años de edad, cuando su madre Norma Osorio Palacios, bebía cerveza junto con Maribel Raquel Osorio Palacios, tía de la menor agraviada y su conviviente (el imputado), quién le solicitó a la menor agraviada, lo acompañe a su domicilio, para hacer descansar a su tía, y al llegar a la vivienda continuaron libando alcohol (cerveza y "punto G"). Es así, que la menor agraviada al sentirse mareada, procedió a ir al baño del domicilio, y encontrándose en los servicios higiénicos, sintió que el imputado le acariciaba las piernas y partes íntimas, ante lo cual gritó, solicitando auxilio.

DELITO IMPUTADO Y MARCO JURÍDICO

2. El marco normativo del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, se encuentra previsto en el numeral seis, del artículo ciento setenta, del Código Penal¹, que prescribe: "El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías [...]. La pena será no menor de doce ni mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme corresponda: [...] 6. Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad".

3. El bien jurídico tutelado en el delito de violación sexual, conforme Acuerdo Plenario N.º 01-2011/CJ-116, del seis de diciembre de dos mil once, fundamento quince, señala: "[...] en los atentados contra personas con capacidad de consentir jurídicamente es la libertad sexual [...] entendida en sentido positivo-dinámico y en sentido negativo-pasivo; el primero se concreta en la capacidad de la persona de disponer libremente de su cuerpo para efectos sexuales, el cariz negativo-pasivo en la capacidad de negarse a ejecutar o tolerar actos sexuales en los que no desea intervenir".

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

4. El Colegiado Superior sustentó la sentencia absolutoria de Abel Ernesto Culis Poma, básicamente porque considera que su negativa respecto a los hechos no ha sido desvirtuada con prueba de cargo sujeta al rigor del debate contradictorio, pues la menor no concurrió al plenario para ratificarse. En conclusión, existe insuficiente actividad probatoria, pues las pruebas de cargo que sustentan la acusación fiscal carecen de objetividad, conducencia y utilidad para acreditar la responsabilidad penal del encausado.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

5. El representante del Ministerio Público en su recurso de nulidad –página quinientos dieciséis– reclamó que:

¹ Mediante Resolución N.º 498, del veintisiete de abril de dos mil quince –página trescientos setenta y siete–, emitida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres, resolvió: adecuar la calificación legal del delito de violación sexual del numeral tres inciso ciento setenta y tres, del Código Penal al artículo ciento setenta numeral seis, en concordancia con el artículo dieciséis del mencionado código.

No se efectuó un correcto análisis de las pruebas actuadas en juicio oral, vulnerándose el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales; y no se aplicaron los parámetros del Acuerdo Plenario N.º 01-2011/CJ-116.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

6. El punto de partida para analizar la sentencia de mérito, es el principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; en cuya virtud, se reduce el ámbito de la resolución, únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido, las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

7. Es materia de cuestionamiento, la sentencia que absolvió de la acusación fiscal al imputado Abel Ernesto Culis Poma, del delito de violación sexual, en agravio de la menor con Clave N.º 787-2008. Por lo que, este Supremo Tribunal verificará, si las premisas fijadas en la sentencia de mérito, se sostienen en la prueba incorporada legítimamente al proceso y valida la decisión del Tribunal Superior o se amparan los reclamos del impugnante.

8. En el motivo contenido en el numeral cinco de la presente ejecutoria suprema, la representante del Ministerio Público, reclama que se ha incurrido en causal de nulidad, por infracción al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales por una ausencia de valoración de la prueba actuada en juicio oral, así como no aplicarse el Acuerdo Plenario N.º 01-2011/CJ-116, pues no se valoró la declaración de la agraviada brindada en sede preliminar, con presencia de fiscal.

9. Fijada la pretensión del impugnante, efectivamente se verifica que en el presente caso, el único elemento que vincularía al encausado, es la sindicación de la agraviada con Clave N.º 787-2008, en su declaración a nivel policial. Entonces, el tema a analizar, radica en determinar si esta resulta ser suficiente para derrotar el principio de presunción de inocencia que les asiste constitucionalmente al imputado.

10. Así, la declaración inicial de contenido incriminatorio –de la agraviada–, debe ser analizada conforme a los parámetros establecidos como doctrina jurisprudencial en el Acuerdo Plenario N.º 02-2005/CJ-116, que fija los parámetros mínimos de contraste como pautas lógicas y criterios orientativos que ayudan a la racionalidad de su valoración de la declaración de la víctima.

11. Por ello, el testimonio de la víctima cuando se erige en prueba de cargo, está sujeta a las siguientes garantías de certeza: **a)** ausencia de incredibilidad subjetiva; **b)** verosimilitud; y **c)** persistencia en la incriminación, a fin de poder determinarse si tiene virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia de los encausados.

12. En esa lógica, la citada agraviada, declaró a nivel policial, de páginas quince a veinte, el dieciocho de diciembre de dos mil trece, a las dieciséis horas, realizada en presencia de su hermana mayor y del representante del Ministerio Público –página once– lo que garantiza la legalidad de la misma, conforme al artículo sesenta y dos del Código de Procedimientos Penales.

Aquí, sindicó directamente al encausado Abel Ernesto Culis Poma como la persona que, en horas de la noche del once de noviembre de dos mil ocho, le tocó las piernas y la vagina cuando se encontraba en el baño del domicilio, donde arrendaba el procesado. Ella pidió ayuda, y no recuerda quien le dio auxilio.

13. Ahora, en sesión de audiencia N.º 12, del veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se oralizó la prueba instrumental siguiente:

13.1. La Denuncia N.º 194, del once de noviembre de dos mil ocho – página dos–, contenida dentro del Atestado N.º 839-VII-DIRTEPOL-L-PNP-DIVTER 2-JDSA-EA-CSA, del doce de noviembre de dos mil ocho, informa que el SOT 3 PNP Cosme Paira Zevallos, a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos aproximadamente del once de noviembre de dos mil ocho, a mérito de una llamada telefónica a la

central 105, por parte de los vecinos del inmueble donde residía el acusado, que señalaron que la agraviada pidió ayuda porque la intentaron violar, se constituyeron a las 00.30 horas del doce de noviembre de dos mil ocho, a la calle Amaru Yupanqui N.º 252, en el lugar, se encontraba Susan Condori Osorio de diecisiete años (agraviada), junto a Maribel Palacios Osorio (tía de la agraviada) y el Ernesto Culis Poma (conviviente de la tía de la agraviada y presunto agresor sexual). Los moradores del lugar, indican que al parecer Ernesto Culis Poma, habría abusado sexualmente de la menor, Al aprovecharse de su estado de embriaguez.

13.2. El Certificado Médico Legal N.º 024668-EA, del doce de noviembre de dos mil ocho – página dieciocho- , que en la data refiere agresión sexual por persona conocida, el once de noviembre de dos mil ocho; y concluye: "Himen complaciente, no signos de acto contra natura y no requiere incapacidad".

14. Así, la prueba incorporada en juicio oral, es insuficiente para vincular al imputado con los hechos atribuidos en su contra, pues la tesis del Ministerio Público para reiterar la responsabilidad del recurrente en esas condiciones decae, porque no se dan los presupuestos de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación en la sindicación de la agraviada con Clave N.º 787-2008, que exige el citado Acuerdo Plenario N.º 02-2005/CJ/116.

15. Es de precisar que el Ministerio Público, como titular de la carga de la prueba, no ha incorporado elemento objetivo alguno que pueda vincular al imputado con los hechos submateria, y determinen de manera categórica que haya realizado el verbo rector del delito, de haber intentado abusar sexualmente de la agraviada.

16. Todos estos elementos probatorios avalan la decisión asumida por el Tribunal de Mérito. De tal manera, que a partir de estas premisas, el motivo invocado por el representante del Ministerio Público no tienen soporte probatorio. En ese sentido, queda claro para este Supremo Tribunal que

existe insuficiencia de medios de prueba que no respalda la tesis inculpativa del titular de la acción penal y responsable de la prueba.

17. En consecuencia, el derecho constitucional de presunción de inocencia del encausado, en el presente caso se mantiene incólume, conforme lo prescrito en el artículo dos, numeral veinticuatro, literal e, de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo ocho, punto dos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y artículo doscientos treinta y tres de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso J. vs. Perú. Por ello, la sentencia venida en grado se encuentra conforme a derecho, y merece ser ratificada conforme a lo dispuesto por el artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon: **NO HABER NULIDAD** en la contra la sentencia del doce de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Cuarta Sala Penal con Reos Libres Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima –página quinientos diez–, que absolvió a ABEL ERNESTO CULIS POMA, de la acusación fiscal como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual en grado de tentativa, en perjuicio de la menor con Clave N.º 787-2008; con lo demás que contiene; y, lo devolvieron.

Intervinieron los jueces supremos Castañeda Espinoza y Chávez Mella, por licencia de las juezas supremas Castañeda Otsu y Barrios Alvarado, respectivamente.

S. S.

PRADO SALDARRIAGA

CASTAÑEDA ESPINOZA

BALLADARES APARICIO

PACHECO HUANCAS

CHÁVEZ MELLA

IEPH/lrgc